



# Noventa y nueve años después

*Marcelo Belinche*

La educación pública argentina es herencia de las mejores ideas de los fundadores y lo mejor de los grandes movimientos populares.


Propone que todos puedan recorrer un camino que reúna el primer guardapolvo con la formación superior, con el Estado como garante. Todos.

En esa posibilidad radica su riqueza, porque aspira a otorgársela por igual tanto a los interiores geográficos y sociales profundos como a los centros privilegiados de un país desigual. Y lo intenta.

Sus escuelas, colegios y facultades contienen un ideal que luce los principios constitucionales, y a la vez, una opción de realización personal y de libertad. El derecho a enseñar y aprender se transforma en un derecho que debilita la injusticia social, y produce resultados que lo confirman, como esos primeros títulos universitarios de familias que rompen la lógica medieval de la riqueza heredada.

Es entonces en esas garantías donde se produce el debate esencial.

Porque cada medida de fortalecimiento de la educación pública discute con el pensamiento que pretende reservarla para algunos. Produce desafíos instrumentales que la recorren por dentro y obligan al análisis serio, desde los contenidos curriculares hasta, tal vez, uno de sus nudos centrales: la clase. E impone una toma de posición explícita para los que forman parte de sus entrañas, en particular los docentes, como protagonistas de su concreción.



El triunfo de Macri en las últimas elecciones completó un recorrido en el que buena parte de la política argentina construyó las condiciones necesarias para que algo inédito, un triunfo en elecciones limpias de un candidato de la derecha explícita, ocurriese.

Fue esa política la que inventó a Macri en los 90, la que privatizó y facilitó la creación de multimedios, la que designó los jueces que lo apoyaron y protegieron, la que negoció sangría tras sangría del Estado con los grupos económicos y financieros que lo modelaron y le aportaron cuadros. Y es esa política argentina la que asiste, cuando no colabora abiertamente, a su desparpajo para gobernar para los intereses de clase que representa y, lo más grave, para inviabilizar el futuro nacional profundizando un estigma histórico que nació con el país, pero se transformó a mediados de los 70 en un constante, el principal, rasgo de decadencia y sometimiento: el endeudamiento externo.


Es probable que el ajuste que requiere la descomunal deuda que Macri contrajo en un lapso brevísimo - y lo que es peor seguirá contrayendo, termine por debilitar su capacidad de acumular consensos con las prácticas elementales de manipulación con las que diseñó su campaña presidencial, pero las condiciones que está creando harán que la política, si se recupera y es capaz de formular una opción de gobierno para las mayorías, esté condicionada de tal modo que gobernar para el bienestar general, principio esencial que define la Constitución, adquiera un carácter utópico.

Las universidades públicas argentinas tienen, en este marco, la oportunidad de corregir los comportamientos que las han caracterizado en demasiados momentos centrales de la historia argentina.

Los reformistas de 1918 decidieron llamar a las cosas por el nombre que tienen. Convocaron a sus compañeros de toda América a la lucha suprema por la libertad a partir de haberse atrevido a realizar una revolución en las conciencias porque entendieron, en la que tal vez sea la más extraordinaria de sus definiciones conceptuales, que toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden.

Toda.

Un siglo después es necesario volver a llamar a las cosas por su nombre.



Es necesario volver a mirar a la América a la que pertenecemos para defender la libertad de sus pueblos.

Es necesario volver a proponer revoluciones en las conciencias de los hombres y las mujeres de nuestro país para que no asistan a la hipoteca del futuro de sus hijos.

Y es imprescindible recuperar el acto de amor por los que aprenden luchando contra aquellos a los que no les importa.

No es este un tiempo que acepte conveniencias corporativas o silencios vergonzantes.

La responsabilidad histórica de las universidades públicas en el centenario de la Reforma es hacerse cargo de las ideas que la produjeron.

Somos los que debemos traducir en resultados esas grandes decisiones. Los que debemos hacernos cargo de la responsabilidad de exponer aciertos y errores, con el compromiso que exige intervenir en el futuro de los jóvenes, lo que es igual a intervenir en el futuro del país. Desde la certeza de que elegimos mucho más que una vocación o un trabajo. Y la conciencia de que la educación pública contiene por definición una postura ideológica frente a los grandes temas nacionales.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo comprendieron.

Intervinieron con fuerza sobre esas garantías en los planos estructurales pero también en los estratégicos. Nos dejan en salarios dignos y nuevos edificios, pero también en leyes determinantes y políticas de Estado, un pilar del proyecto nacional.

A nosotros nos toca proteger ese legado, instalarlo en la agenda pública y exigir definiciones claras de cara al país que viene.

Porque si defender la educación pública es defender lo mejor del pensamiento argentino, mejorarla y profundizarla es defender a los argentinos.